

Capítulo 8

LUCHA Y PODER

Historia de las organizaciones trabajadoras
en Argentina

La CGT y el retorno de Perón

El testimonio de Victorio Paulón (2013) brinda una síntesis para comprender esta etapa desde las organizaciones trabajadoras:

“... era el vértigo político de la época. Cuarenta días de Gobierno de Cámpora, un mes entre el “Devotazo” y Ezeiza, Perón muere antes de cumplir un año de mandato. Es evidente que los tres años que transcurren entre una y otra dictadura eran una transición en la que la correlación de fuerzas se fue inclinando inexorablemente hacia la derecha en la medida en que la movilización obrera y popular fue perdiendo fuerza, de la confianza a la desazón.” (p. 86)

Dr. Daniel Giorgetti

El período 1973-1976 es clave para comprender la historia argentina contemporánea y está caracterizado por un clima de movilización social, tensión política y crisis económica de singulares características. La movilización popular había alcanzado un nivel de masividad inédito y los cambios sociales parecían imminentes. No se trataba sólo de organizaciones de trabajadoras y agrupaciones políticas, sino también de sectores de las clases medias, con amplia presencia de juventud y de grupos vinculados al cristianismo popular, a nuevas expresiones artísticas y a las universidades. La caída de Juan Carlos Onganía y la transición que se abrió a continuación evidenciaron que se había roto la provisoria hegemonía política de una dictadura, planteada como la “mano dura” que pondría orden y refundaría la economía, la sociedad y la política. Ese modelo fiel al liberalismo económico clásico había fracasado y había aglutinado a distintos sectores críticos con fuerza de movilización. Cerrada la posibilidad de participación política partidaria, la tensión social y política se expresó por otras vías: nuevas formas de protesta social de base obrera, nuevas organizaciones de base y acciones más radicalizadas por parte de agrupaciones armadas. Al mismo tiempo, frente al avance de la movilización popular se reorganizaron los intereses económicos y los

grupos conservadores en una nueva alianza con las Fuerzas Armadas para disputar el poder.

En este capítulo se presenta la evolución que tuvieron en 1973 las distintas posiciones políticas para desarrollar luego los principales acontecimientos que marcaron la situación política y económica del período.

1. Los actores y la situación previa

Juan Domingo Perón fue una figura clave en el proceso. La apertura democrática lo tuvo como el protagonista central y distintos sectores políticos apostaban a que su liderazgo finalmente permitiera la vuelta a un cauce institucional para los debates y descomprimiera la situación de violencia política. Sin embargo, la acción que habían desplegado los distintos sectores identificados con el peronismo era diversa y aún contradictoria, dado que convivían grupos de izquierda y derecha, sindicatos, organizaciones juveniles y dirigentes tradicionales. Como analiza Torre (1983), “detrás de su proclamada fidelidad a Perón, el vasto movimiento congregado alrededor a su retorno escondía mal su tentación por la intransigencia, el peso de sus insatisfacciones” (p. 42). A su vez, el propio Perón había manejado con ambigüedad el apoyo a los distintos sectores. Respaldaba las acciones de la Juventud Peronista y de los sectores más radicalizados de la Izquierda Peronista pero mantenía vínculos estrechos con sectores conservadores y caracterizados como “la derecha”.

“el regreso del peronismo al poder en 1973, primero en la figura de Cámpora y especialmente con la llegada del mismo Perón a la presidencia en octubre de ese año, hizo estallar la competencia entre los múltiples sectores internos que postulaban su propia interpretación del peronismo como la legítima y trataban de arrastrar a Perón hacia esa posición, además de invocar su lealtad absoluta al líder.” (Franco, 2008: 21)

En realidad, el proyecto de Perón reeditaba la idea de conciliación entre sectores de la producción y el trabajo, y pedía esfuerzos a los dos para revitalizar la economía y fortalecer las instituciones en medio de un clima de protestas y violencia política. Esto parecía muy difícil de lograr. Se pregunta Torre (1982):

“Cómo imponer la necesidad de las coincidencias políticas a quienes las reiteradas proscipciones habían formado en la conciencia aguda de las diferencias? ¿Cómo convencer de que era preciso compatibilizar las

demandas sectoriales con la salud de la economía a quienes habían visto retroceder, monótonamente, su participación en la distribución del ingreso? Finalmente, cómo obtener la paz de aquellos cuya violencia había sido previamente exaltada? Digamos que, detrás de su proclama da fidelidad a Perón, el vasto movimiento congregado alrededor de su retorno escondía mal su tentación por la intransigencia, el peso de sus insatisfacciones.” (Torre, 1982: 1)

Es imposible describir el período sin aludir a las organizaciones juveniles mencionadas en el capítulo anterior. La juventud fue a la vez permeable y protagonista del clima de época que promovía un compromiso social y político que se reflejaba incluso en las expresiones artísticas, la vida académica y la religiosidad. Las noticias internacionales reforzaban esta posición y creaban un horizonte de cambio social cer cano, sea a través de un proceso revolucionario, de acciones solidarias en barrios pobres o en formas más difusas de presión social sobre el Gobierno y el capitalismo en su conjunto.

Entre los sectores políticos juveniles se destacaba la Juventud Peronista, que había sido fundada en 1957 y estuvo vinculada a la resistencia peronista, por lo cual sufrió detenciones y represión, y el primer caso de un desaparecido: el joven obrero Felipe Vallese. A partir del Ier congreso, en 1963, se identificaron distintas líneas: los sectores nacionalistas, vinculados a la derecha antiimperialista tradicional y que se manifestaban contrarios al sistema republicano, entre los que se destacó la organización Tucuará; los sectores revolucionarios que formaron posteriormente las Fuerzas Armadas Peronistas (1967), y los sectores vinculados al cristianismo popular, como el Comando Camilo Torres.

Hacia 1970 se habían producido reagrupamientos que permitieron identificar dos corrientes predominantes. Por un lado, la “izquierda”, que incluía a la “Tendencia Revolucionaria”, donde se agrupaban, entre otros: la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), la Agrupación Evita, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la agrupación Montoneros, el Peronismo de Base, el Movimiento Villero, el Frente de Lisiados Peronistas y la Agrupación de Artesanos. Por otro lado, los sectores de la “derecha” u “ortodoxos”, que incluían al Comando de Organización, a la Concentración Nacional Universitaria, a la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA) y a la Juventud Sindical Peronista. Como se explicó en el capítulo anterior, la dinámica de la época

llevó a la formación de grupos que posteriormente se fusionaban en otros y las trayectorias personales de muchos militantes transitaron diversas formaciones.

Dentro del Partido Justicialista la “rama juvenil” había adquirido protagonismo institucional, con la incorporación de dos referentes en el Consejo Nacional del PJ: Rodolfo Galimberti (que provenía de una agrupación nacionalista) y Juan Manuel Abal Medina (hermano de uno de los fundadores de Montoneros, abatido previamente). En 1972 se realizó el congreso de unidad de la Juventud Peronista donde la presencia de Montoneros resultó significativa y, en 1973, se amplió en las JP locales, fomentando una acción de estilo movimientista que incluía trabajos en los barrios y militancia de base.

En cuanto a los otros partidos políticos, también se habían vivido procesos de mayor participación juvenil, en particular en los vinculados a la izquierda, como el Partido Socialista y los partidos Intransigente, Comunista y Revolucionario Cristiano, que formaron en 1973 la Alianza Popular Revolucionaria. En la Unión Cívica Radical el protagonismo juvenil lo lideraba la agrupación universitaria Franja Morada, fundada en 1967 como Unión Nacional Reformista Franja Morada. Surgida contra la intervención de las universidades por parte del Gobierno de Onganía y cuando fue disuelta la Federación Universitaria Argentina (FUA), incluía varios sectores del reformismo universitario. Posteriormente, se formalizó como rama universitaria de la UCR. Junto a su surgimiento, dentro del partido, también se creó la Junta Coordinadora Nacional, que cuestionaba la “burocracia radical”. Los sectores de la dirigencia, asociados a Ricardo Balbín, los acusaban de afinidades “marxistas”. Por otro lado, una agrupación interna se constituyó con expectativas de renovación generacional. Se trataba del Movimiento de Renovación y Cambio, que obtuvo creciente peso en el Partido y estaba liderado por Raúl Alfonsín. Dentro de las líneas internas, también representó posiciones más críticas la Juventud Radical Revolucionaria, de peso significativo en las Facultades de la UBA.

El movimiento estudiantil en su conjunto generaba acciones fuera de los marcos de las juventudes políticas, como ocupaciones de edificios, actos y marchas, lo que lo volvió un actor significativo en los años que nos ocupan²⁷⁵. “En estos años los/ las jóvenes también intensifican su participación en diversas organizaciones barriales y territoriales. El trabajo social en las villas miseria y en barrios de los suburbios de las grandes ciudades es una expresión de este proceso.” (Bonvillani, Palermo, Vazquez, Vommaro, 2008, p. 52).

Un actor clave de la época es el movimiento obrero. Las divisiones entre sectores combativos y sectores negociadores adquirieron otra faceta, debido a la fuerte movilización que se generó después del Cordobazo. La crítica a la burocracia sindical, en la que se englobaba también a los sectores ortodoxos, implicaba que se trataba de un obstáculo para los procesos de cambio social, ya que desviaba al pueblo de la lucha que debía ser dada. Con proyectos divergentes, ya fueran ortodoxos como combativos, los sindicatos peronistas depositaban su confianza en la conducción de Perón. Esto sucedía pese a que Perón se había distanciado de los sindicalistas en años anteriores. El líder había sido crítico de la autonomía de algunos dirigentes sindicales y de sus intentos de organizarse fuera de la conducción. Las actitudes colaboracionistas de muchos líderes sindicales con el Gobierno anterior lo habían llevado a priorizar a los sectores juveniles combativos. El acercamiento a los sectores de la juventud había distanciado también a algunos dirigentes, que le reclamaban más claridad para condenar los crímenes de Vandor y Alonso. En este proceso, mantuvieron una relación estrecha tanto José Rucci, elegido Secretario General de la CGT y caracterizado como un “leal” a Perón, como el dirigente Lorenzo Miguel (UOM). Ambos aceptaron la autoridad de Perón y su elección de Cámpora, pese a que privilegiaba el “ala política” por sobre el “ala sindical”. Otros mantuvieron la distancia, como Coria, Secretario de las 62 Organizaciones, que rechazó su autoridad y debió renunciar de esa agrupación y alejarse de la UOCRA.

“Para los trabajadores sindicalizados, el retorno de peronismo al Gobierno, implicaba la posibilidad de presionar a los empresarios para superar los límites salariales establecidos en el Pacto Social, porque sabían que Perón necesitaba la concertación social para estabilizar el nuevo régimen. Pero al mismo tiempo creían que sus amplios derechos a la organización y movilización recuperados debían permitir la presión a los empresarios y lograr éxitos sectoriales y por empresa. (Godio, 2000, p.1073).

A su vez, los dirigentes de la CGT mantenían una relación tensa con los representantes del sindicalismo clasista y del peronismo combativo, que en un contexto de fuerte politización dominaban algunas seccionales y actuaban en las fábricas. Los dirigentes más visibles eran Agustín Tosco (Luz y Fuerza) y René Salamanca (SMATA).

²⁷⁵ Al respecto se puede profundizar en Bonavera (2006) y Barletta (2006).

Como se mencionó en el capítulo anterior, la trama organizativa de los barrios y las villas de Buenos Aires también se había fortalecido²⁷⁶. Entre otras experiencias, el Movimiento Villero Peronista tuvo un protagonismo creciente y mostraba capacidad de movilización, diferenciándose en algunas ocasiones del Partido Peronista y de otras agrupaciones del mismo perfil. A su vez, en los barrios estaban presentes sacerdotes de perfil popular y los denominados “curas villeros”, desde la constitución del equipo de Pastoral en Villas (1969). Uno de sus referentes, el sacerdote Carlos Mugica, participó del viaje de retorno de Perón de 1972. El 17 de diciembre de 1972 se formó el Frente Villero de Liberación Nacional (FVLN) en la Villa 31 de Buenos Aires.

Después de las dificultades vividas en los años 60, las organizaciones de mujeres se visibilizaron. Los antecedentes que hemos mencionado en capítulos anteriores aludían a una militancia principalmente circunscripta a partidos políticos. En esta ocasión, se desarrolló un movimiento feminista que tuvo como impulso la Unión Feminista Argentina (UFA), creada en 1970 y liderada por María Luisa Bemberg, Griselda Gambaro y Gabriela Christeller, y el Movimiento de Liberación Femenina, dirigido por María Elena Oddone. Ambas agrupaciones editaban publicaciones y desarrollaban diversas líneas de debate en relación con la politización reinante. En los años siguientes se crearon nuevas organizaciones, algunas vinculadas a partidos de izquierda como el Partido Comunista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)²⁷⁷, y otras independientes, que confluyeron en 1974 en el Frente de Lucha de la Mujer (FLM). Desde estos espacios participaron de las discusiones del Año Internacional de la Mujer en 1975, en la ONU. Más allá de los temas específicos que promovían, como los debates sobre aborto y métodos anticonceptivos, se articularon también con organizaciones políticas.

También se visibilizaron las organizaciones de disidencias sexuales en un incipiente movimiento de Gays y Lesbianas. Si bien reflejaba la presencia pública registrada internacionalmente a partir de la revuelta de Stonewall (1969), se puede considerar que desarrolló un proceso propio y local. En 1971 se formó el Frente de Liberación Homosexual (FLH), que reunía agrupaciones anteriores y contaba, entre sus miembros, con escritores como Manuel Puig, Néstor Perlongher y Juan José Sebreli. El clima político de la época también se vivió en sus debates. La vinculación que mantenían

²⁷⁶ Se puede profundizar en Ziccardi (1984), Camelli (2014) y Snirofsky (2015).

²⁷⁷ Señala Burton: “pese a la formación de frentes femininos o secciones de mujeres en las organizaciones políticas de la nueva izquierda, las feministas fueron miradas con sospechas, puesto que consideraron que las reivindicaciones de las mujeres distraían los verdaderos objetivos de la Lucha revolucionaria, ya que no ponían en tensión la lucha de clases como contradicción principal, y por la relación de la militancia feminista con el proceso de modernización” (Burton, 2013, p. 3)

con sectores del peronismo combativo y de la izquierda, de todos modos, no estuvo exenta de conflictos y muchas veces se vieron rechazados en las movilizaciones y reuniones²⁷⁸.

Este escenario de organizaciones y movilización mostraba una dinámica intensa que se traducía en la inminencia de cambios. Junto con ellos, la cuestión de la violencia caracteriza la etapa. Hay una aceptación generalizada para emplearla, sea respondiendo a la violencia estatal, sea para ejercerla desde el poder del Estado. Más tarde, la disposición explícita de las Fuerzas Armadas y el aval formal del Gobierno de María Estela Martínez de Perón completaron un escenario que se puede interpretar como antesala de la Dictadura.

Refiere Franco (2008) que la Agrupación de Abogados Peronistas en abril de 1973 justificaba: “La violencia popular ha sido la respuesta a la violencia del régimen”. Esto iba en sintonía con las propias declaraciones de Perón que, inicialmente, había justificado la violencia armada de la juventud y, ya en el poder, la había desestimado. Analiza Svampa (2003) la entrevista que brindó en 1971 al grupo “Cine de Liberación”:

...“en ese reportaje caracterizaba a las organizaciones armadas como ‘formaciones especiales’, concediéndoles el comando táctico en el teatro de operaciones, y reservándose para sí mismo el rol de la conducción estratégica.... Perón enunciaba tres vías para la lucha: la guerra revolucionaria, la insurrección y la normalización institucional. ‘La guerra revolucionaria’, desizaba a manera de clara advertencia contra el establishment militar, ‘era quizá un camino, si no había otro camino’” (p. 4)

La misma investigadora cita una encuesta de 1971 que daba una aprobación de alrededor del 50% a la acción de “violencia guerrillera”. Por otro lado, el enfrentamiento entre posiciones de izquierda y derecha proclives a la violencia, que abonaba a la idea de “dos demonios”²⁷⁹, se hallaba ya instalada en los discursos de la época²⁸⁰.

²⁷⁸ Entre los antecedentes, en la agrupación “Nuestro Mundo” (1967) participó Héctor Anabitarte, joven trabajador militante del Partido Comunista que fue expulsado del partido por su homosexualidad. (Barrancos, 2014, p. 24)

²⁷⁹ La “teoría de los dos demonios” proponía que había en Argentina un “demonio” que era la violencia de las organizaciones armadas y a él se le opuso otro “demonio” que era la violencia ilegal de la Dictadura, en una operación discursiva que magnificaba el poder de los guerrilleros, planteaba una situación de guerra en el país y criticaba por igual a unos y otros por los métodos empleados abstrayéndose de los proyectos políticos y el contexto.

²⁸⁰ Ampliar en Franco (2008) y Crenzel (2008).

2. Las elecciones y la presidencia de C ampora

La presidencia del general Lanusse hab a abierto formalmente la transici n pol tica con el "Gran Acuerdo Nacional" que fue descartado en la pr ctica por la acci n de los partidos pol ticos y su "Hora del Pueblo". En un contexto cada vez m s cr tico, el deterioro econ mico se profundiz  y la inflaci n lleg  al 64,2% en 1972, como se inform  en el cap tulo anterior. Paralelamente, la tensi n pol tica continuaba con movilizaciones populares y con el crecimiento de las acciones de las organizaciones armadas.

El viaje de Per n en 1972, luego de 17 a os de proscripci n, influy  no s lo en sus seguidores sino en todo el arco pol tico. Se destac  por sus conversaciones con Ricardo Balb n (UCR) y por la elecci n de H ctor C ampora y la formaci n del Frente Justicialista de Liberaci n Nacional (FREJULI), que incluy  a sectores del frondizismo, la Democracia Cristiana y el Partido Conservador Popular. En el armado interno del justicialismo, la designaci n de C ampora priorizaba el "ala pol tica" y a los sectores de izquierda. Sin embargo, el expl cito apoyo a la JP y las agrupaciones juveniles, pronto registr  diferencias. Cuando se acercaban las elecciones, el propio Per n desautoriz  las afirmaciones del secretario de la Juventud Peronista, Rodolfo Galimberti –quien hablaba de instaurar las milicias populares luego del triunfo del justicialismo–, y lo sustituy  por Juan Carlos Dante Gullo. La CGT unificada bajo el mando de Jos  Ignacio Rucci, avalado por Per n, constitu a un actor esencial para el proyecto. Por otro lado, las organizaciones armadas mantuvieron su organizaci n y sus acciones en la cercan a de las elecciones, si bien los sectores peronistas proyectaban una participaci n de tipo institucional y hasta consideraban posible un acercamiento con las Fuerzas Armadas. Por esta raz n limitaron sus acciones armadas en el primer tiempo del Gobierno peronista.

En marzo tuvieron lugar las elecciones. H ctor C ampora gan  con 49,5% votos, casi 30 puntos por sobre la segunda fuerza, el radicalismo. El justicialismo tambi n hab a triunfado en 20 de las 22 provincias, una contundente muestra de fuerza. Esta victoria gener  discusiones entre los mandos militares, que intentaron presionar al presidente electo antes de la asunci n del mando. Los contactos del Ej rcito, la aplicaci n parcial de la ley marcial y las declaraciones p blicas amenazantes fueron consistentes despu s de las elecciones.

A su vez, la situaci n pol tica se sigui  deteriorando en la transici n entre las elecciones y la asunci n presidencial. En abril, Lanusse impuso el estado de sitio despu s del asesinato del coronel H ctor Iribarren y del almirante Hermes Quijada. El 22 de

mayo fue asesinado Dirk Kloosterman (secretario general de SMATA). El ERP ocup  la Central At mica de Atucha y las FAR tomaron la localidad de Villa Allende, en C rdoba. Per n cuestion  a los dirigentes juveniles tanto por estas acciones como por los discursos de corte revolucionario que realizaban. En los  ltimos meses, las Fuerzas Armadas mantuvieron reuniones con el Gobierno electo en busca de una amnist a que no lograron.

H ctor J C ampora asumi  la presidencia el 25 de mayo 1973, y as  concret  el retorno de un Gobierno peronista luego de 18 a os de proscripci n. En el acto de asunci n qued  claro el apoyo y los v nculos internacionales que ten a C ampora: asistieron el presidente de Cuba, Osvaldo Dortic s, y el de Chile, Salvador Allende²⁸¹. La jornada se vivi  como un d a de alegr a popular, las multitudes llenaron la Plaza de Mayo y adyacentes. No hubo un ataque directo a los s mbolos militares, m s all  de insultos y alguna agresi n, y predominaron los grupos de militantes y simpatizantes que festejaban, lo que daba inicio a un per odo que se llam  la "Primavera camporista".

En el acto de toma de posesi n del cargo, el presidente anunci  un proyecto de amnist a para los presos pol ticos, estimados en m s de 400. Antes de que el proyecto se hiciera efectivo, multitudes de militantes peronistas se dirigieron a la Carcel de De-voto en una enorme manifestaci n conocida como la "Marcha de la Liberaci n", con la que ejercieron presi n para que se liberara a los presos pol ticos, lo que se concret  horas m s tarde. La movilizaci n termin  con disparos y heridos y deriv  en que el presidente firmara el Decreto 17/1973 que dispuso el indulto de 372 personas. El 27 de mayo se sancion  la Ley N  20.508, que dispon a la amnist a para todos los delitos pol ticos, incluyendo huelgas y ocupaciones de f bricas. Esta caracter stica de la movilizaci n popular desbordando los marcos institucionales del Gobierno marc  la breve presidencia de C ampora. Justamente, una cuesti n clave de los gobiernos peronistas es la adaptaci n a los cauces institucionales, c mo incorporar los grupos diversos al movimiento justicialista y darles organicidad.²⁸² La reuni n de C ampora con los representantes de los sectores juveniles el 13 de junio tuvo esa intenci n.

El gabinete presidencial reflejaba las divisiones del peronismo. Inclu a a sectores m s alineados con la derecha, como el asesor personal de Per n, Jos  L pez Rega, y representantes de los sectores juveniles, como Esteban Righi (ministro del Interior) y Juan Puig (Relaciones Exteriores). El Ministerio de Trabajo qued  en manos de un

281 El Gobierno de C ampora tuvo un acercamiento a los pa ses latinoamericanos y al llamado "Tercer Mundo". Poco despu s de la asunci n, el propio Per n gestion  el ingreso de Argentina al "Movimiento de pa ses no alineados".

282 Este es uno de los puntos de an lisis de Svampa (2003).

sindicalista, Ricardo Otero (UOM), y el de Economía, a cargo del representante de la Confederación General Económica, José Ber Gelbard. La izquierda del movimiento justicialista ocupó un lugar importante en la Cámara de Diputados, así como algunas gobernaciones. Entre ellas se destacan la de Buenos Aires, donde asumió Oscar Bidegain, y la de Córdoba, en manos de Ricardo Obregón Cano.

También la presencia de la izquierda peronista se hizo efectiva en el ámbito universitario. El Gobierno introdujo reformas educativas de mano del ministro Jorge Taiana, pero donde los cambios se percibieron con mayor contundencia fue en las universidades nacionales. La extensión de las “cátedras nacionales”, el perfil “tercermundista” y “liberador” de los proyectos educativos, el involucramiento de los estudiantes en formas de intervención a través de la extensión social fueron promovidos por las nuevas autoridades. La Juventud Universitaria Peronista se volvió hegemónica en los centros de estudiantes y numerosos rectores respondían al peronismo revolucionario o tenían posiciones progresistas en cuestiones educativas y académicas, como Rodolfo Puiggrós, en la UBA, Rodolfo Agoglia en la UNLP o Víctor Benamo, en la UNS.

El acercamiento del Gobierno con la Juventud Peronista se reflejó también en la relación con las organizaciones armadas de ese perfil. Hubo una inicial suspensión de las acciones directas, aunque antes de la asunción de Cámpora tanto FAR como Montoneros habían previsto continuar con la lucha armada. Asimismo, algunos integrantes de Montoneros establecieron relaciones políticas con las Fuerzas Armadas a través de interlocutores del propio Ejército, especialmente a partir de la designación del general Carcagno al frente de esa Arma, que se distanciaba de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La agitación social por fuera de canales institucionales se extendió, orientada a desplazar a representantes del Gobierno anterior de lugares locales (desde hospitales y escuelas hasta fabricas y diarios). Svampa (2003) menciona:

“Estas acciones no respondían a una conducción unificada e involucraban actores de variado tipo, desde individuos desarraigados hasta funcionarios de Gobierno, desde activistas y simpatizantes del ala izquierda hasta, en algunos casos, militantes de la derecha peronista. Muchas eran realizadas en nombre de la lucha “anticontinuista” otras, con el objetivo de desarrollar propaganda armada. La movilización alcanzó picos de verdadera insurrección así entre el 4 y 15 de junio se produjeron casi 500 tomas de distinto tipo en todo el país y se han calculado unas 2000 para el período de referencia.” (Svampa, 2003: 399)

La extensión de este fenómeno, difícil de controlar por parte del Gobierno, ponía en peligro la lógica de cooperación entre los diversos sectores que se expresaba en el “pacto social” que alentaba Perón y resultó en presiones desde los grupos empresarios. Finalmente, la JP hizo un pedido formal para limitarlas durante junio de 1973.

El alineamiento internacional incluyó las gestiones para el ingreso de Argentina al Movimiento de Países No Alineados²⁸³, impulsadas por Perón pero resistidas por los sectores más anticomunistas de su entorno, en particular por el ministro López Rega. El interés económico que acompañaba esta posición era contar con nuevos mercados en los países del Tercer Mundo, y marcó un acercamiento comercial a los países comunistas, como Cuba. La situación se volvió más compleja en 1973: la “crisis del petróleo” (agosto de 1973) impactó en la economía mundial y limitó el crecimiento previsto para Argentina. En términos geopolíticos, Estados Unidos favoreció golpes militares en la región, fundados en la Doctrina de Seguridad Nacional, como el de Uruguay (27 de junio) y el de Chile (11 de septiembre).

3. Gelbard y el plan económico

A las dificultades que tenía la economía local se sumó la mencionada situación internacional. Los diversos modelos de “estado de bienestar” ensayados en América Latina requerían ser reformulados. El plan económico de José Gelbard apuntó a generar una mayor participación de los asalariados en el ingreso, orientado al 50% del producto bruto interno en cuatro años; frenar la alta inflación y limitar las pujas intersectoriales por distribución de ingreso. Proponía hacerlo a través de un “pacto social”, una legislación sobre radicación de capitales extranjeros, una política agraria que articulara el excedente con la industria y la ampliación de mercados para productos agrícolas e industriales.

El pacto social se firmó el 8 de junio de 1973, contaba con el aval de Perón y proponía acuerdos entre empresarios, trabajadores organizados y Gobierno. Se denominó “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social” y lo firmaron Julio Broner, por la CGE y José Ignacio Rucci, por la CGT. Afirmaba:

²⁸³ El Movimiento de Países No Alineados reunía desde 1961 a países que no se alineaban con el sistema de alianzas de EEUU y de la URSS, mayormente del denominado “Tercer Mundo”, que habían tenido un primer acercamiento en la Conferencia de Bandung (1955). Entre los principales promotores estaban los líderes de Egipto, Indonesia, India y Yugoslavia.

“En los últimos 18 años el país ha asistido a un proceso de injusta distribución del ingreso, por la cual los trabajadores asalariados que alcanzaron una participación de más del 50 por ciento del ingreso nacional durante el Gobierno del Gral. Perón, hoy lo hacen en solo el 36,1 por ciento”.

Requería que la CGT aceptara reducir las negociaciones paritarias cada dos años a cambio de que los empresarios (mayormente, de la CGE) congelaran los precios y garantizaran un aumento de salarios. Los sindicatos aceptaron firmar pero con importantes resistencias y cuestionamientos internos. Señala DI Tella (1983):

“Para obtener el apoyo de los sindicatos, el propio Perón necesitó la lealtad incondicional del secretario general de la CGT, José Rucci. Los sindicatos estaban muy preocupados no sólo por las consecuencias económicas, sino también por la suspensión de las negociaciones colectivas, que constituían una de sus actividades más importantes”. (p. 104)

Un relato testimonial se lee en Leyba (2010), quien fue redactor del plan y funcionario de Gelbard.

“El Pacto Social fue el producto de una concertación política previa basada en la necesidad de recuperar la democracia y de detener la violencia. Fue realizado mediante el mecanismo de la concertación en tres niveles de organización de la sociedad: la concertación económica, que posibilitó poner en marcha el aparato productivo estancado, la concertación social, que generó la dinámica de la inclusión social, sin la cual no es posible el desarrollo de la democracia, y la concertación política, que dio lugar a la acumulación de poder para una gestión auténticamente transformadora” (p. 10)

En el momento de implementación también los empresarios mostraron sus diferencias. El plan fue cuestionado por los voceros de las empresas multinacionales y las asociaciones empresarias del poder económico, como la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. Paralelamente, la eficacia del mismo quedaba en duda por la coyuntura internacional. Señala Torre que el nivel de la inversión privada volvió a caer en 1973, “indicando el escaso entusiasmo con el que la comunidad empresarial recibió la convocatoria”. Si bien algunos aspectos fueron aceptados formalmente, no

hubo apoyo en la inversión necesaria para la viabilidad financiera del plan. A través de la Secretaría de Comercio se creó una comisión de vigilancia y seguimiento de productos, como textiles o carne vacuna, pero muchas empresas realizaron aumentos significativos por anticipado de forma de no verse tan afectadas por la medida de congelamiento.

El ministro Gelbard promovió procesos de industrialización en las provincias y construcción de infraestructura, que el año siguiente derivaron en la firma de un “Acta de Reparación Histórica” y un régimen de promoción industrial. Algunos estudios cuestionan que no cambiaba la estructura de poder de la economía argentina en tanto la burguesía agraria no se veía afectada en la propiedad de la tierra y los sectores industriales se beneficiaban ampliamente del mismo sin que los sectores trabajadores vieran una mejora significativa de su situación.²⁸⁴

La política económica tuvo un “rotundo éxito inicial” (según Gerchunoff y Llach, 1998): el PBI creció el 4,5%; el desempleo bajó del 6,1% al 4,5%; y la inflación, que había llegado a 60% en el primer trimestre del año, se redujo al 0% en el segundo semestre, lo cual produjo una revalorización del peso argentino. (Gerchunoff y Llach, 1998, p. 342-347)

4. La matanza de Ezeiza y el Gobierno de Perón

El regreso triunfal de Perón el 20 de junio de 1973 se planeaba con un multitudinario acto en Ezeiza, en un puente situado a 3 km del Aeropuerto Internacional. Un número superior a los dos millones de personas se encaminaron esa mañana a recibir al líder, muchas de ellas formando columnas organizadas de militantes. La seguridad del acto estaba a cargo del teniente coronel Jorge Manuel Osinde, que había organizado grupos armados previamente, y quien desplazó a la policía del sector central. Para los analistas²⁸⁵ la organización previa revela un plan para “escarmentar” a Montoneros y debilitar a Cámpora. Desde temprano el palco estuvo rodeado de más de mil “custodios” pertenecientes al “Comando de Organización” (una agrupación de la derecha peronista), junto con grupos de la Juventud Sindical y de agrupaciones gremiales. Ante la presión de los jóvenes militantes de “la Tendencia” -que buscaban instalarse en un lugar privilegiado frente a donde iba a hablar Perón-, la respuesta desde el palco fueron disparos con armas largas, que fueron registrados por las cámaras de

284 Se puede ampliar en De Riz (1987) y Peralta Ramos (1978).

285 Verbitsky, 1985. También se puede consultar el ensayo de Bonasso (1997).

televisión. El hecho generó una estampida entre los asistentes y los grupos de choque persiguieron y atacaron a muchos de ellos. El saldo fue de 13 muertos y 365 heridos. Perón debió aterrizar en la Base Aérea de El Palomar. Verbitsky (2006) concluye que

“La masacre de Ezeiza cierra un ciclo de la historia argentina y prefigura los años por venir... En torno de la masacre de Ezeiza y de sus consecuencias comenzó la alianza entre la derecha peronista y la derecha no peronista, que tan clara se hizo durante el Gobierno militar 1976-1983.” (p. 6)

Para Paulón (2013), que fue un testigo privilegiado de esta época, la matanza fue una respuesta al acto de asunción de Cámpora, donde la “tendencia” había dominado el escenario y luego la movilización para liberar a los presos políticos.

El evento profundizó una ruptura interna y debilitó la posición de Montoneros. La agrupación justificaba el distanciamiento del líder a partir de la “teoría del cerco”: consideraban que Perón era víctima de un entorno que no le permitía ver la realidad. La posición de Cámpora quedó sumamente debilitada con este episodio y el 13 de julio de 1973 fue forzado por Perón a renunciar junto con el vicepresidente. El desplazamiento del presidente del Senado en un episodio confuso que lo llevó fuera del país, derivó en que Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega, asumiera la presidencia provisional. El presidente interino convocó a elecciones pero al mismo tiempo desplazó a varios ministros considerados de izquierda, como Juan Carlos Puig (Canciller) y Esteban Righi (ministro del Interior), en una demostración del peso creciente que iba teniendo López Rega. Unos días antes de las elecciones, un decreto declaró ilegal al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y prohibió la publicación de sus materiales y de sus comunicados.

Resultados de las elecciones del 23 de septiembre de 1973

Perón – Perón (FREJULI)	61,85%
Balbín – De la Rúa (UCR)	24,42%
Manrique –Martínez R. (APE)	12,19%
Coral y Páez (PST)	1,52%

Aunque durante un tiempo se especuló con la fórmula Perón-Balbín, los sectores de los propios partidos se resistieron. La edad de Perón y los datos de su delicado

estado de salud favorecieron que la fórmula se completara con alguien procedente del peronismo, pero la forma de sortear las internas fue designar a su esposa, María Estela Martínez (familiarmente, “Isabel”). Perón se presentó a elecciones en septiembre con la fórmula Perón-Perón y ganó por casi 62% votos. El 12 de octubre de 1973 asumió la presidencia.

Dos días después de las elecciones, José Rucci, el secretario general de la CGT que había avalado las acciones de Ezeiza, fue asesinado. Aunque los autores no fueron directamente identificados, quedó claro que había sido una operación de un comando de Montoneros y Perón dio por cierta la versión. Este hecho fue un golpe directo al propio Perón y mostraba una reacción dura de los sectores de la izquierda juvenil. La consecuencia inmediata fue el distanciamiento definitivo de Perón y del Gobierno respecto de Montoneros y parte de los sectores juveniles, sumado a un acercamiento a los sectores ortodoxos, a la derecha y al movimiento obrero peronista. El Consejo Superior Peronista aprobó días después una “orden reservada” que declaraba la guerra contra el “marxismo” (término utilizado de forma deliberadamente ambigua y reemplazado informalmente por “los zurdos”) y la exclusión de quienes comulgaran con ellos de las actividades y la vida partidaria. La CGT eligió a Adelino Romero (de la Asociación Obrera Textil) como reemplazante de Rucci.

“Perón intentaba ahora, ya presidente, desembarazarse de su izquierda sin quedar aprisionado por la oligarquía, los yanquis y el gran capital asociado a ellos. A su vez, el peronismo revolucionario intentaría obligar a Perón a superar ideológica y políticamente su propio proyecto. Ese juego signaría en lo fundamental la vida política argentina durante nueve meses”. (Godío, 1986, p. 36)

Con la influencia de López Rega, los sectores ortodoxos retomaron un lugar hegemónico y cada vez más homogéneo en el Gobierno y sobre Perón. Se instaló el discurso de “lucha contra el marxismo”. Perón, públicamente, afirmó: “el que está con esos intereses, se saca la camiseta peronista y se va”.

Por otro lado, el 19 de enero de 1974 el ERP ejecuta una acción de alto impacto al atacar al regimiento de la ciudad de Azul. Este acontecimiento acelera la acción del Gobierno contra la izquierda peronista y contra las organizaciones de izquierda en general.

La ofensiva oficial en contra de los sectores juveniles y vinculados a la izquierda incluyó presiones para que los gobernadores de esa filiación renunciaran²⁸⁶. El 17 de noviembre de 1973 se intervino la provincia de Formosa, donde las medidas sociales y el peso de las Ligas Agrarias habían provocado una reacción de los sectores conservadores. Las muertes del gobernador de Misiones, Juan Manuel Irizábal, y del vicegobernador de Catamarca, Raúl Sabagh, no resultaron aclaradas²⁸⁷.

El 22 de enero de 1974 el gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, fue forzado a renunciar y lo reemplazó su vice, Calabró, que provenía del sindicalismo peronista. El 27 de febrero el jefe de policía de Córdoba, Antonio Navarro, se alzó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y lo detuvo, la provincia fue intervenida el 2 de marzo y se designó un interventor federal en un proceso conocido como “Navarrazo”. La posterior intervención de la provincia no repuso al gobernador Bidegain en su cargo. Acusado de “izquierdismo” también fue desplazado de su cargo el gobernador de Mendoza, el 25 de julio.

En esta avanzada contra la izquierda tuvo una activa participación José López Rega, quien creó grupos de choque con estrategias de “Escuadrones de la Muerte” y organizó en 1973 la “Alianza Anticomunista Argentina” (o “Triple A”). Además se estableció una estructura represiva que tuvo varios componentes. Chaves (2015) describe la organización de la represión incluyendo a los “comandos” integrados por sectores militares; la mencionada “triple A”, integrada por ex miembros de fuerzas de seguridad y nuevos aspirantes reclutados para el caso; y los “Grupos de tareas”, que remitían a distintos miembros de las Fuerzas Armadas y que comenzaron a actuar antes del golpe de 1976.

La Triple A se dedicó a la persecución, el secuestro y la eliminación de militantes del peronismo y de agrupaciones de izquierda y tenía vínculos comprobados con espacios y fondos del Ministerio de Bienestar Social. Entre los principales responsables se menciona al propio López Rega y al comisario Alberto Villar, el comisario Luis Margaride y dos oficiales retirados de la policía, Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales. La ofensiva de la Triple A se fue incrementando con los meses y alcanzó a cometer alrededor de 400 asesinatos (ver “Los atentados de la Triple A”). Asimismo,

286 La “ofensiva contra los gobernadores” se puede profundizar en el texto de Pablo Bonavena (Izaquirre, 2009).

287 Irizábal murió junto con toda su familia al explotar en el aire el avión que los llevaba en noviembre de 1973. Sabagh murió en octubre de 1973 en un accidente de avión junto con otras autoridades provinciales en octubre de 1973. Ninguno de los dos sucesos fue esclarecido.

en 1974 realizó amenazas a actores, actrices, cantantes populares y académicos²⁸⁸. El financiamiento de la organización obedeció a los contactos que tenía el propio López Rega (miembro de la Logia Propaganda Due y con vínculos en los Estados Unidos), y al frente de la misma estuvo el comisario Alberto Villar, luego designado jefe de la Policía Federal, quien había sido adiestrado en las técnicas propuestas por la Doctrina de Seguridad Nacional y se había entrenado en contrainsurgencia con la Escuela Francesa²⁸⁹.

Los atentados de la Triple A

Entre las víctimas principales se encuentran el diputado Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi, abogado y hermano del ex presidente. También fueron asesinados profesores universitarios, sindicalistas y militantes peronistas como Enrique Grimberg, Constan-tino Razzetti, Antonio Delleroni, Nélida Arana, Carlos Miguel y Rodolfo Achem, Carlos Pierini (dirigente petrolero), Horacio y Rolando Chaves, sindicalista y miembro de la JP. En 1974 fue asesinado el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi, y el ex gobernador de Córdoba y secretario general de UTA, Atilio López. Sufrieron atentados el dirigente de la Juventud Peronista, Juan Manuel Abal Medina, y el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen.

El distanciamiento personal de Perón con los sectores de izquierda se hizo explícito el 22 de enero de 1974, cuando convocó a los diputados de la Tendencia que se oponían a los cambios del Código Penal orientados a profundizar la represión, y finalmente poco después con la expulsión de ocho de ellos. A su vez, dentro de las filas de los sectores juveniles se profundizaron las divisiones, y se destacó un sector – en el que se encontraba Montoneros- que se orientaría a posiciones más radicalizadas.

Esta ruptura se expresó públicamente en la Plaza de Mayo, en el acto del 1ro de mayo 1974. Perón habló a una nutrida multitud “después de 21 años en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy”. En su discurso reivindicó a las organizaciones sindicales, y les recordó que había tenido razón al pedirles que se cuidaran porque venían tiempos difíciles. En tanto, los sectores juveniles cantaban consignas contra los sectores conservadores y la burocracia sindical. En dos momentos de su

288 Refiere López Alonso ((1982) que entre los amenazados que debieron exiliarse se encontraban Norman Briski, Nacha Guevara, Horacio Guarani, Héctor Alterio y Luis Brandoni. También referentes de educación como Jorge Taiana (ex ministro de Educación) y Rodolfo Puiggrós (ex rector de UBA).

289 Se puede profundizar en Mc Sherry (2005).

discurso, el presidente los enfrentó: primero reclamando silencio a “estos estúpidos que gritan” y luego, ante el aumento de los cánticos contra “los gorilas” que llenaban “el Gobierno popular”, cuestionó que “algunos imberbes” pretendieran tener más mérito que los viejos militantes. Ante esta afirmación, la Juventud Peronista y los Montoneros abandonaron el acto y la ruptura se hizo completa.

Carlos Mugica

Fue un sacerdote que, proveniente de la clase alta y profesor universitario, se volcó al trabajo en villas y fue un representante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Era un destacado orador, participaba de debates públicos con el marxismo y acompañaba a muchos grupos de la Juventud Peronista, incluso fue cercano a los líderes de Montoneros y brindó un oficio religioso en ocasión de la muerte de varios de ellos. Desarrolló un amplio trabajo social en villas, donde tenía un amplio reconocimiento popular. Estuvo en el avión que trajo de vuelta a Perón en 1972 y mantuvo una relación cercana con el líder.

El 11 de mayo de 1974, al salir de dar una misa, Mugica fue asesinado de 14 disparos por Rodolfo Almirón, colaborador de López Rega.

Por otro lado, el poder económico concentrado, en estrecha vinculación con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, se manifestaron como un actor decidido a practicar una “cirugía mayor”. Parte de la prensa y de los sectores empresariales (mayormente conservadores y antiperonistas), también promovían explícitamente el terrorismo de Estado. En marzo de 1974 el economista Juan Alemann recomendaba en una nota periodística aplicar las directivas de “noche y niebla” de Hitler a los opositores:

*“Si uno ve esta guerra sucia desde un punto de vista meramente militar, llega a la conclusión de que el Gobierno puede acelerar y facilitar considerablemente su victoria, actuando contra las cúpulas manifestadas -de ser posible en “noche y niebla”- y sin que esto trascienda demasiado. Si Firmenich, Quieto, Ortega Peña, etc., desaparecieran de escena, esto implicaría un golpe extremadamente duro para el terrorismo.”*²⁹⁰

290 Declaraciones de Juan Alemann, Secretario de Hacienda, al diario *Argentiniisches Tageblatt* el 17 de marzo de 1974

La creciente vinculación de Perón con las estructuras sindicales se reflejó en estrecha colaboración y en participación a través de discursos en la CGT. Aquí también se operó un fortalecimiento de las estructuras institucionales tradicionales frente al surgimiento de agrupaciones y movimientos en fábricas y en las bases gremiales. Uno de los elementos que colaboró en este sentido fue la Ley 20615, promulgada el 29 de noviembre de 1973, que modificaba la ley de asociaciones profesionales. El objetivo era fortalecer la centralización y a los jefes sindicales, dejar en manos del Ministerio de Trabajo el otorgamiento de personería gremial al sindicato más representativo de cada actividad y desalentar la diversidad de sindicatos, la posibilidad de nombrar interventores, la posibilidad de participar en partidos políticos, la legalidad de sindicatos de empresa y la posibilidad de intervención a sindicatos de base.

5. La situación económica y los conflictos por empresas

La economía siguió a cargo de José Gelbard, cuyo plan económico mostró indicadores positivos hacia fines de 1973, a pesar del contexto internacional. En ese momento anunció que pondría en marcha el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional y una nueva ley de inversiones que promoviera al capital nacional. Como se mencionó antes, los datos económicos resultaban favorables en cuanto a la reducción de la inflación del 62% en 1972 a 25% en 1973, la valorización del peso, el crecimiento del PBI y una situación de casi pleno empleo: el desempleo cayó a 2,5% frente al 6,1% del inicio del Gobierno de Cámpora, incluyendo un alto superávit en comercio exterior, que algunos autores caracterizan como el mayor histórico²⁹¹. Esto permitió que el ministro Gelbard anunciara la proximidad del objetivo de “inflación cero”.

Pero finalmente, la crisis del petróleo afectó al comercio en forma negativa y agravó la situación de la industria por alzas de precios de insumos, que no podían ser trasladados a los precios debido al pacto social. El traslado se produjo igual y las tensiones aumentaron. La inflación comenzó a dispararse en 1974 (y cerraría el año con un 40%). La Comisión Nacional de Precios, Salarios y Nivel de Vida, de la que participaban sindicatos y empresarios, no resultó efectiva frente a la emergencia. Gelbard, a través del secretario de Comercio, autorizó a las empresas a trasladar el aumento de los insumos importados a los precios de sus productos, pero tras el reclamo de los sindicatos, se definió que el Gobierno se haría cargo de la emergencia de las empresas subsidiando las compras de insumos importados.

291 Cfr. Gerchunoff y Llach (1998)

Esto llevó a que se tensionara aún más el pacto social: aumentaron las presiones de los empresarios, con casos frecuentes de desabastecimiento de productos que derivaron en el crecimiento del mercado ilegal. La reacción de las bases sindicales aumentó y se multiplicaron las acciones en los lugares de trabajo. Como se dijo, la victoria electoral alimentó las expectativas de recuperación económica de los trabajadores y de un posicionamiento político favorable, que se veía frustrado por la situación económica. Los conflictos en empresas, que habían comenzado con anterioridad, se profundizaron. Algunos de los más destacados fueron los de Molinos Río de la Plata, Acindar, General Motors, Terrabusi y Philips, que se mencionan con más detalle a continuación. Estas movilizaciones obreras espontáneas, generadas en los lugares de trabajo, desbordaban a los líderes sindicales, quienes empezaron a plegarse a los reclamos, ya que entendían que si no participaban en las reivindicaciones de las bases debilitaban su representatividad y disminuían su ya cuestionado prestigio. Señala Juan Carlos Torre (1983):

“Los conflictos de empresa alrededor de las condiciones de trabajo, combinados con su frecuente prolongación en el terreno de la representación sindical, habían sido el rasgo dominante de la movilización obrera en los núcleos industriales del interior en la fase previa 1969/73. Después del triunfo electoral del peronismo, se propagaron también a Buenos Aires, reproduciendo las modalidades de acción obrera paradigmáticamente condensadas en la experiencia de SITRAC-SITRAM en 1970, el cuestionamiento de las prerrogativas de la gerencia, el recurso de la acción directa, la formación de liderazgos alternativos al sindicato oficial.” (p.88)

Indica Daniel James (1990)

“los trabajadores encontraron mil maneras de trasladar la victoria política en las urnas a ventajas propias en el lugar de trabajo, las condiciones de este y las de sanidad y seguridad, los salarios atrasados, la reclasificación de las tareas y la cuestión de designar nuevas y auténticas direcciones de planta, se plantearon como problemas a medida que innumerables quejas acumuladas en el período anterior a 1973 comenzaron a ventilarse. En consecuencia, a despecho de una política oficial de consenso y conciliación en el plano político, en términos sociales se presenció una intensificación del conflicto de clase.” (p. 323)

Estas acciones incluían una crítica a la burocracia, en la medida en que hacían referencia a que la dirigencia ejercía un poder centralizado, que ignoraba los intereses de los representados y dificultaba la democracia interna o, aún más, se utilizaba con fines personales. Los grupos opositores a la conducción nacional formaron nuevas agrupaciones que reclamaron participación en las fábricas y pidieron elecciones que podían poner en peligro el verticalismo de los sindicatos nacionales. Si bien muchas veces los conflictos se resolvieron con beneficios para los trabajadores, los empresarios buscaron las formas de salirse de las normas del pacto. En enero de 1974, el Gobierno modificó el Código Penal para incluir delitos graves de incitación a la violencia y secuestro, incluyendo las ocupaciones de fábricas, con penas de 5 a 15 años.

Conflictos en grandes empresas

Molinos Río de la Plata: el 15 de junio de 1973, los trabajadores ocuparon la planta para realizar reclamos relacionados con higiene y seguridad, y exigieron la renuncia de todos los delegados y el llamado a elecciones. Frente a promesas recibidas, desocuparon la planta pero no se cumplieron los acuerdos y 12 obreros fueron despedidos, después de lo cual se hizo una nueva toma con continuidad de producción. Los reclamos incluyeron obreros despedidos y el conflicto se extendió con diferentes modalidades hasta enero de 1974, con la intervención del Ministerio de Trabajo.

General Motors: en junio de 1973 se registraron conflictos por ritmo de producción. Primero, resistencia a las medidas y luego, reorganización a partir de los delegados gremiales. Esto llevó a retiro de colaboración y paros parciales, los trabajadores fueron acusados de boicotear la producción y fueron despedidos 32 delegados, con el fracaso de negociaciones del Ministerio de Trabajo. SMATA decretó huelga y finalmente los trabajadores ganaron al constatare que las medidas de procesos de producción eran excesivas y no aplicables.

Philips. En 1972 comenzaron los conflictos por un reclamo a la comisión interna para reducir la jornada de trabajo y por problemas de salubridad. Sin respuesta, se organizaron comisiones espontáneas y se apeló al apoyo de la UOM; sin embargo, la empresa despidió a un militante y esto generó en diciembre un paro que terminó con la formalización de la nueva comisión y el diálogo con la empresa.

Terrabusi. Reclamos de obreros en noviembre de 1973 por aumento salarial y cuestiones de salubridad y calidad del trabajo. Después del despido de 30 gremialistas, se tomó la empresa. En la reunión del Ministerio de Trabajo los delegados fueron acusados de connivencia con la empresa pero la toma fue desalojada por la policía.

Frente a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, creo que mi deber es pedirle al pueblo que no sólo los identifique sino también que los castigue "292

6. El Gobierno de María Estela Martínez de Perón

Perón murió el 1ro de Julio de 1974, a los 78 años, debido a una enfermedad coronaria. Su fallecimiento generó un gran impacto, no sólo por el prestigio popular que tenía sino porque era visto, aún por los sectores antiperonistas, como el único capaz de ordenar la conflictividad política. Las expresiones públicas de pesar incluyeron a todo el arco político; entre las cuales se destacó la expresión del líder radical Ricardo Balbín en su velatorio: "Este viejo adversario viene a despedir a un amigo". Los distintos factores de poder brindaron un apoyo circunstancial a la presidente que había asumido, María Estela Martínez de Perón.

Si bien contaba con el apoyo de la CGT, en manos del sindicalismo peronista tradicional, se hizo evidente el aumento de la influencia de López Rega y de las alianzas con los sectores más visibles de la derecha vernácula. Tratando de evitar la ausencia de conducción y cierto vacío de autoridad frente a las presiones, el Gobierno estableció mayores contactos con las Fuerzas Armadas y con los sectores empresarios, contactos que buscaban favorecer a ambos sectores brindándoles espacio en las acciones de Gobierno, tanto en tareas de represión como en la limitación del poder sindical. Progresivamente, los militares fueron ocupando posiciones de poder y recibieron instrumentos legales que justificaron su intervención contra los que considerarían "subversión", fueran organizaciones armadas o protestas sociales.

También se incrementó la persecución contra los sectores obreros combativos y contra los partidos de izquierda, incluyendo a la izquierda peronista. Se intervinieron varios sindicatos: gráficos, Prensa, FOTIA, Luz y Fuerza y SMATA (Córdoba). Se dispuso la detención de Raimundo Ongaro, Agustín Tosco y René Salamancas. Asimismo, se intervinieron las universidades a partir de la designación de Oscar Ivanissevich como ministro de Educación (Ver más adelante).

Las acciones de la Triple A se multiplicaron: fueron asesinados periodistas, como Barraza y Laham, que habían investigado la desaparición de Felipe Vallese; el ex

Astarsa. El astillero Astarsa empleaba a 1500 trabajadores en Tigre. El 24 de marzo de 1973, después de un accidente que provocó la muerte del trabajador José María Alesio, se convocó una asamblea donde predominó la posición del sindicalismo clasista. El gremio de navales (SOIN) se sumó inicialmente al reclamo en tanto el otro gremio que intervenía (UOM) lo rechazaba, pero finalmente el conflicto se profundizó y los trabajadores autoconvocados tomaron la planta con los directivos como rehenes.

El ministro de Trabajo y el ministro del Interior del Gobierno de Cámpora se hicieron presentes sin lograr destrabar la situación, en tanto se sumaban numerosos afiliados de UOM en disconformidad con la actitud del sindicato y representantes de juventudes políticas. Luego de la intervención del gobernador de la provincia se logró una reunión entre todos los actores y la empresa aceptó cinco puntos de las demandas laborales, entre ellas una Comisión de Seguridad e Higiene Laboral con participación de trabajadores y académicos.

Asimismo, en el Sindicato de Obreros de la Industria Naval (SOIN) se impuso una conducción combativa y sufrieron el secuestro y asesinato de militantes. Finalmente, el sindicato fue intervenido. Durante la Dictadura, 10 de sus miembros fueron asesinados, hubo 21 desaparecidos y 20 secuestrados con liberación posterior.

Esto llevó a numerosas discusiones en la "Comisión de precios, salarios y nivel de vida" que compartían. El Estado dejó de subsidiar la compra de insumos importados, se incrementó el mercado en negro y se registró escasez de productos. La presión de los distintos sectores junto con las acciones de las organizaciones armadas llevaron a Perón a realizar, el 12 de junio, un discurso de tono duro, que contenía la amenaza de su renuncia. En ese discurso -que finalizó con la conocida frase "[L]evo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino"- Perón expresaba:

"Todos hablan de que fuerzas foráneas trabajan para crear trabas a la decisión tomada, pero pocos se ponen al servicio de la buena causa y en ello no hablo de los opositores sino muy especialmente de los propios partidarios, que poco hacen para asegurar la pacificación... Todos los que firmaron en dos oportunidades ese acuerdo sabían también que iban a ceder parte de sus pretensiones, como contribución al proceso de liberación nacional. Sin embargo, a pocos meses de asumir ese compromiso pareciera que algunos firmantes están empeñados en no cumplir con el acuerdo y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo..."

292 Mensaje del Presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, dirigido al Pueblo Argentino desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno: 12 de junio de 1974, 11:30 horas. Fuente: http://www.libreopinion.com/members/justicialismo/discursos/peron/12_6_74.htm

gobernador de Córdoba y dirigente de UTA, Atilio López; el sobreviviente de la masacre de José León Suárez y militante peronista Julio Troxler; el hijo del sindicalista Raimundo Ongaro, estudiantes universitarios y militantes de la Juventud Peronista y del Partido Socialista de los Trabajadores²⁹³. En algunas de estas acciones actuó otra agrupación del entramado represivo, la Concentración Nacional Universitaria (que se desarrolla más adelante).

Recuerda Chaves (2015) la ofensiva desatada por “grupos especiales”. En particular, refiere a la detención y desaparición del gobernador de Salta, Miguel Ragoné, el 11 de marzo de 1976, por parte de un escuadrón, una decena de personas que actuó a cara descubierta y en condiciones de “zona liberada” por las fuerzas de seguridad. El escuadrón también eliminó luego a uno de los testigos. Más tarde, en esta causa se procesó al comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Menéndez. Aclara Chaves (2015) que

“en el polo industrial de la ciudad de Ensenada, en el tramo que va de enero de 1976 al 24 de marzo, los Escuadrones de la Muerte proceden con similares características y metodología. No son los únicos casos: hechos similares se repetían en todo el país”. (p. 187)

Las organizaciones armadas también aumentaron sus acciones. Se inició una etapa en la que predomina un proceso de “militarización” frente a la ofensiva de los sectores de la derecha, que incluyó la reproducción de las estructuras organizativas militares. Svampa (2003) explica:

“El país iba deslizándose cada vez más por una pendiente incontrolable de violencia, de la cual eran responsables los grupos de extrema derecha, activados desde el Gobierno, así como las agrupaciones armadas de izquierda. Las estadísticas muestran que durante el solo año de 1975, la cantidad de asesinatos políticos, debido tanto a la represión ilegal como a la violencia guerrillera, alcanzó la cifra de 860 personas. Desde la izquierda armada, una de las características del período es que las principales organizaciones armadas, ERP y Montoneros, fueron subordinando la estrategia política a la lógica militar. Tanto la significatividad reducida del espacio de la política institucional como la primacía de una lógica militarista tuvo graves consecuencias, pues creó nuevas

oportunidades para el regreso y religitimación de las Fuerzas Armadas. (p. 37)

Entre las acciones de mayor repercusión se cuentan el asesinato del ex ministro Arturo Mor Roig, del director del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd, del dirigente nacionalista Jordán Bruno Genta, del comisario Alberto Villar, del secretario adjunto de UOM Rosario, Teodoro Ponce, de los generales Ibarzábal y Cáceres Monié, del teniente coronel Julio Larrabure y del coronel Martín Rico. También tuvieron lugar secuestros extorsivos con el fin de conseguir fondos para el funcionamiento de las propias organizaciones. Probablemente, el más conocido fue el de los hermanos Jorge y Juan Born, por el cual obtuvieron 64 millones de dólares. También causó impacto público el secuestro del presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Hugo Anzorreguy.

El Gobierno endureció las acciones de represión, incluyendo la censura de medios de prensa y editoriales: a la clausura del diario El Mundo (en marzo de 1974) se sumaron La Causa Peronista el 6 de septiembre, la expropiación de la editorial Codex 1974 y los diarios Crónica y La Calle (en diciembre de 1974). Se profundizó, además, el contacto con los militares (que ya entonces estaban divididos entre colaborar o esperar el momento para tomar el poder), lo cual se hizo efectivo al integrar a un militar al gabinete. Se trató del coronel Vicente Damasco, quien aceptó luego de otro hecho impaciente: el secuestro y muerte del coronel Larrabure (que había estado más de 300 días detenido en una “cárcel del pueblo”²⁹⁴ del ERP), en agosto de 1975.

7. La intervención en las universidades

El giro político del Gobierno de María Estela Martínez volvió insostenible la permanencia del ministro de Educación, Jorge Taiana. En 14 de agosto de 1974 fue reemplazado por Oscar Ivánissevich, quien declaraba su intención de poner orden y acabar con la “infiltración marxista” en la educación. Además, Ivánissevich estaba en contra del ingreso restringido y del Gobierno tripartito, y planteaba que la investigación no la debían hacer las universidades sino las empresas, lo que llevó a la renuncia del secretario de Ciencia y Técnica, Julio Olivera, el 17 de septiembre de 1974.

²⁹³ Se puede profundizar en Chaves (2015).

²⁹⁴ Con ese término se aludía a cárceles clandestinas de las organizaciones armadas.

El Gobierno intervino las universidades, nombrando como rectores a reconocidos representantes de la derecha. Asimismo, reprimió violentamente a los estudiantes que resistieron las intervenciones, dejó cesante a un alto porcentaje de profesores universitarios y no docentes, aplicó censura en libros y bibliografía, prohibió los centros de estudiantes, cerró algunas carreras (como Psicología) y exigió certificados de buena conducta a los estudiantes, entre otras medidas. Su carácter persecutorio se asoció con las acciones de la Triple A (que atacó a autoridades universitarias) y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), grupo de derecha que cometió asesinatos en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.

En la Universidad de Buenos Aires se encontraba a cargo el Rector Laguzzi, también considerado de perfil progresista como su antecesor, Puiggrós. Laguzzi renunció luego de sufrir un atentado en su casa que dejó heridos a él y a su mujer, en tanto su hijo moría asesinado. El 17 de septiembre de 1974 fue designado interventor Alberto Ottalagano, resistido en vano por las agrupaciones estudiantiles. El nuevo rector cerró todas las Facultades durante varios días (algunas permanecieron más tiempo en esa situación, como Exactas o Filosofía y Letras) para imponer cesantías y control. Izaguirre (2011), que analiza el caso, cita el diario La Opinión del 12 de octubre de 1974:

“En la Facultad de Ciencias Exactas sobre un total de 1.100 docentes (profesores, auxiliares de cátedra, secretarios y preceptores) quedaron cesanteados 500; sobre 220 profesores hubo 68 bajas. De 420 con dedicación exclusiva quedaron cesanteados 250. En Arquitectura se consignan 150, en Derecho sobre un total de 1.000 quedaron cesantes 400; en Ciencias Económicas sobre 396, 127. En Filosofía y Letras los 1.300 docentes, en Ingeniería entre un 16% y un 80% sobre el total según departamento” (p. 14).

La CNU había surgido en Mar del Plata en 1971, compuesta por jóvenes estudiantes universitarios y miembros de la policía, y tuvo un desarrollo destacado en la ciudad de La Plata. Algunos de sus miembros –que habían participado de Tacuara– se distanciaron de esa agrupación y fortalecieron su perfil que adhería al fascismo y al peronismo. A partir del Gobierno de María Estela Martínez varios fueron designados en ámbitos universitarios y jurídicos; como Gustavo Demarchi, uno de sus dirigentes, que en 1974 fue nombrado fiscal en Mar del Plata. Se trataba de un grupo que circulaba por los pasillos universitarios ejerciendo tareas de control, con armas, cadenas y bastones, e interrumpía asambleas universitarias por medio de amenazas. En uno de los casos más resonantes que los tuvo como protagonistas, un grupo de sus miembros

entró disparando en la Facultad de Arquitectura (UMDP) y asesinó a una asistente, Silvia Filler.

La CNU realizó atentados, secuestros y asesinatos de dirigentes vinculados a la izquierda universitaria y a la organización Montoneros. A partir de 1975 contó con protección judicial (según consta en las investigaciones) y aumentó su poder de fuego²⁹⁵. Posteriormente, algunos de sus miembros se integraron con las acciones de la Triple A y, más tarde, otros participaron de los grupos de tareas de la Dictadura que se instaló en 1976. En diciembre de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a varios de los miembros de CNU por los crímenes cometidos, entre ellos los dirigentes Demarchi, Durquet y Otero²⁹⁶.

El saldo de la combinación entre la política universitaria represiva y la “depuración” llevó a que miles de investigadores y docentes fueran cesanteados y a que numerosos estudiantes fueran amenazados y asesinados. Señala Izaguirre (2011): “Las consecuencias de esa política se verían mucho después: Antes del 24 de marzo de 1976, caerían muertos y desaparecidos 417 estudiantes universitarios y terciarios”. (p. 302)

8. La economía y el Rodrigazo

En un intento de acercarse al capital más concentrado, la presidente desplazó a José Gelbard y designó en su lugar a Alfredo Gómez Morales, candidato propuesto por la CGT y que era aceptado por López Rega y el entorno empresarial. Sin embargo, las medidas de ajuste que trató de implementar gradualmente, que pretendían conseguir la llegada de capitales mediante una ley de inversiones extranjeras y devaluación de la moneda, no fueron efectivas y los aumentos de salarios eran rápidamente devorados por la inflación. La situación económica se deterioró, con reducción de reservas y aumento del déficit, y la inflación alcanzó el 80% anual. En una situación internacional desfavorable y con el fracaso de controles de precios, se registró desabastecimiento de alimentos como una de las expresiones de la presión empresarial.

²⁹⁵ Un detalle de las acciones desde el testimonio personal puede encontrarse en la nota periodística <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-157308-2010-11-22.html>

²⁹⁶ El diario La Capital informó de la prisión perpetua para Demarchi, Durquet y Otero y condenas menores a José Luis Granel, Juan Pedro Asaro, Juan Carlos Asaro y Roberto Justel. En <https://www.lacapitalmdp.com/prision-perpetua-para-gustavo-demarchi/>

"Las nuevas autoridades económicas tenían un punto de vista intermedio en cuanto a la liberalización de la economía. Consideraban que, en esas circunstancias, una liberación de todos los precios hubiera tenido por efecto un enorme salto en sus niveles. Estimaron que, para evitarlo, la liberación de los precios debía ser parcial y acompañada por una política de restricción financiera, que redujese los gastos de todo". (Di Tella, 1983, p. 206)

La discusión del aumento salarial fue laudada por un 15% que autorizó el Ministerio y que no satisfacía a ninguno de los actores, con lo que se produjo un traslado a precios que, sumado a la baja de precios de las exportaciones y los altos volúmenes de importados, generó caída de reservas. Los sindicatos presionaron para anular contratos internacionales (ITT y Siemens, entre otros) y aumentar el control de locales de firmas de combustible como Shell y Esso, lo que llevó a una crisis con inversores extranjeros. Finalmente, Gómez Morales presentó la renuncia el 31 de mayo de 1975 y fue designado el candidato propuesto por López Rega, Celestino Rodrigo.

Considera Rovelli (2018) que primó la lógica del capital monopolista, que tenía por objetivo "el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior" para fortalecer monopolios.

"Sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales." (s/n)

Celestino Rodrigo asumió en junio de 1975 y aplicó una política liberal ortodoxa de shock. El objetivo era subir los precios respecto de los salarios para aliviar las deudas empresarias para finalmente estabilizar la economía con inversiones extranjeras. Entre otras medidas, generó una devaluación del 160% para el cambio comercial, y hubo un aumento de 181% en naftas y 75% en transporte.

"Primero fue el 'Rodríguez', plan inspirado y guiado por Ricardo Manzueto Zinn, hombre del Grupo FIAT (y miembro del 'grupo Azcuénaga', que fueron los que elaboraron el plan económico de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL - MACRI), que fue viceministro de Celestino Rodrigo en junio de 1975, quién en agosto del año 1976

publicara un libro titulado "La Segunda Fundación de la República y en él va a sostener: "...cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro". (Rovelli, 2018)

El plan produjo una crisis, ya que impactó en un 34% de inflación para julio y un virtual estancamiento de la economía, que entró en recesión (lo que se conoce como "estancamiento"). Se generó desabastecimiento de alimentos y combustibles, el aumento consiguiente del malestar de la población y la reacción de la CGT. Es conveniente aclarar aquí que se estaba dando un proceso de dos dimensiones claras. Por un lado, la agitación de base, que se fortalecía a través de asambleas de trabajadores y tomaba representatividad en los cuerpos de delegados y las comisiones internas, y que había llegado a la organización de "coordinadoras interfábricas". Por otro, las conducciones de los sindicatos nacionales, de perfil mayoritariamente ortodoxo y muchos sindicados como "burócratas sindicales" por las organizaciones de base, que presionaban a las empresas en las negociaciones salariales y en esa instancia se enfrentaban directamente con el Gobierno (que se negaba a convalidar aumentos, por ejemplo, de los textiles o la UOM).

Es en este punto y frente a la situación disparada por las medidas del ministro Rodrigo cuando confluyen las demandas del plenario de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados de base con la voluntad política y la estructura nacional de la CGT. La primera muestra la constituyó un paro que la CGT convocó en la zona metropolitana para el 27 de junio, pero que fue replicado en distintos lugares del país. Ya en esa instancia se pedía la renuncia de Rodrigo y López Rega. En esas oportunidades, la consigna contra los ministros preservaba a la presidente. Finalmente, se convocó a una huelga general de 48 horas para el 7 y 8 de julio de 1975. La magnitud de la movilización popular provocó la renuncia de Celestino Rodrigo y, junto con él, el desplazamiento de López Rega. Pero la situación económica ya se había definido, a favor del capital financiero y de la dolarización de la cultura argentina, ya que la inflación disciplinaba al poder político y sindical y dejaba al país en manos del sistema financiero internacional liderado por el FMI.

El debate entre las organizaciones armadas

Las dificultades para unificar acciones entre las organizaciones armadas se expresaron en debates ideológicos. Una de las exposiciones más sólidas de los mismos constituyó la polémica entre FAR (vinculada al peronismo antes de sumarse a Montoneros) y ERP entre diciembre de 1970 y julio de 1973. La discusión la llevaron adelante dirigentes representativos de ambas agrupaciones a través de distintos medios (entrevistas, cartas, incluso un documento producido por militantes encarcelados en Córdoba).

Las discusiones apelan a la teoría marxista, a la vinculación de lo ideológico y lo popular en las organizaciones, a las distintas formas de concebir lo nacional dentro del proceso revolucionario y a las formas de interpretar el peronismo. La identificación del peronismo como herramienta de la burguesía de unos es contestada con la crítica al ideologismo ausente de lo popular: "Es la experiencia del pueblo la que determina qué es lo que está vigente y qué es lo que no lo está, y ese es el punto de partida para cualquier tarea política revolucionaria". "En el fondo, después de todo esto, la diferencia radical se seguirá manteniendo: posición nacional o posición internacional como punto de partida." Fuente: De Santis (2017, p. 84-85)

La sucesión de ministros de Economía (Pedro Bonanni, Antonio Cafiero, Emilio Mondelli) no logró detener el creciente deterioro, agravado por operaciones de grupos económicos tendientes a forzar una situación límite que desacreditara finalmente a la presidente y creara el clima favorable para el golpe.

9. Violencia armada y represión: la antesala de la Dictadura

Como se mencionó, las organizaciones armadas desarrollaron un proceso de militarización e incrementaron sus acciones. Montoneros pasó oficialmente a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974 y llevó adelante un plan estratégico que incluía el financiamiento a través de secuestros y "expropiaciones de bienes". Por otro lado, realizó ataques coordinados a las fuerzas de seguridad que se completaron con la instalación de campamentos en Tucumán (donde venía operando el ERP). El ataque al Regimiento de Infantería de la ciudad de Formosa enfrentó directamente al Ejército, con el que había mantenido lazos de contacto en los años anteriores.

El Ejército Revolucionario del Pueblo, rama armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores, también se había fortalecido en los años previos y mantuvo una

posición combativa respecto del Gobierno peronista y de las Fuerzas Armadas. Realizó ataques a instalaciones del Ejército y estableció campamentos en la provincia de Tucumán, en los que actuaban alrededor de 500 militantes. Durante el Gobierno de María Estela Martínez realizaron un copamiento de una fábrica militar en Villa María. En diciembre de 1975 planearon la mayor acción a través del ataque al Batallón Domingo Viejo Bueno, de Monte Chingolo. Este episodio terminó en una completa derrota y significó una merma significativa en su capacidad de acción.

El Gobierno había aumentado su acción represiva con diversas medidas, entre ellas la declaración de estado de sitio, en noviembre de 1974, y el 5 de febrero del año siguiente habilitó al Ejército, por Decreto 261/75, a "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". Así dio origen al llamado "Operativo Independencia", una operación que aplicó técnicas inspiradas en el asesoramiento de los militares de la Escuela Francesa y en el marco de la Doctrina de Seguridad, consistente en la organización del primer campo clandestino de detención, la aplicación sistemática de torturas en los interrogatorios y las primeras desapariciones de carácter sistemático. Esto es desarrollado por Crenzel (2008), quien señala que estas detenciones no fueron denunciadas ni investigadas inicialmente. Recién en 2017 en una megacausa judicial llevada adelante en los tribunales de Tucumán, se pudieron caracterizar los hechos y establecer responsabilidades (ver "Los crímenes del Operativo Independencia")

Se debe considerar que ya en ese momento la información periodística era limitada y contribuía a constituir una situación de conflicto mucho mayor que el real, a efectos de fortalecer la idea de un enemigo que debía ser vencido sin miramientos. El Ejército informaba que el ERP tenía bajo control un tercio de la provincia y magnificaban la cantidad y la forma de los muertos, con una campaña de noticias falsas que, años más tarde, reprodujeron los grupos negacionistas. Algunas de aquellas falsas informaciones fueron desmentidas, incluso, por algunos de los responsables²⁹⁷.

²⁹⁷ El general Acdel Vilas, en un reportaje de 1983, afirmaba: "El ERP nunca tuvo armas antiaéreas, ese mito era parte de la propaganda propia, que la prensa y muchos políticos asumieron como cierto, no sé si por inocencia o por otras razones inconfesables". En <http://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/754632/acdel-vilas-historia-general-inicio-terrorismo-estado>

Los crímenes del Operativo Independencia

El 15 de septiembre de 2017 se conoció la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán para la causa Operativo Independencia. Por la misma dio por probados 266 de los 271 crímenes que presentó la fiscalía y estableció seis condenas a perpetua, siete absoluciones y penas entre 4 y 18 años para el resto de los genocidas que fueron juzgados.

Esto incluyó la calificación de “delitos de lesa humanidad”, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975. Se trató de la primera condena por crímenes previos a la Dictadura. Señalaba el fiscal Pablo Camuña:

“Es un caso único en la Argentina, donde hubo una ocupación militar dentro del propio país, porque el Ejército se instaló en el sur tucumano de la misma manera en que se ocupa una nación extranjera: censos, control territorial, intervención absoluta de la sociabilidad de cada uno de los pueblos, bases y centros clandestinos diseminados por todo Tucumán.” (en <https://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/09/operativo-independencia/>)

El juicio recogió el testimonio de 400 personas y permitió refutar las afirmaciones de que se trataba de una situación de guerra interna, al reconocer un plan de eliminación de los campamentos de las organizaciones armadas.⁴

En realidad, el Ejército llevó a cabo una acción militar que desarticuló rápidamente los campamentos del ERP (que eran los mayores y contaban con entre 200 y 500 combatientes) y de Montoneros, que era más pequeño y contaba con alrededor de 100. El operativo se inició el 9 de Febrero, cuando el Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal impusieron su autoridad, y dejaron al gobernador Amado Juri en un lugar secundario. Las fuerzas militares llegaron a reunir alrededor de 5000 efectivos. Aunque los medios hablaron de combates, en general fueron acciones menores y hubo dos episodios de cierta magnitud en los que terminaron abatidos todos los combatientes de las organizaciones armadas.

El ERP venía realizando acciones a partir de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. El operativo desarrolló combates militares, pero se concentró en las ciudades, donde identificó a militantes de organizaciones políticas y sociales de izquierda. Ya se consideraba que la batalla era también cultural y eso justificaba las acciones de detención ilegal, torturas y desaparición de cadáveres en fosas comunes, así como la creación del primer centro clandestino de detención en la localidad de Famailá. Sin

embargo, los métodos fueron aplicados en todas las dependencias que ocupó el Ejército en distinta medida. Explicaba el General Acdel Vilas:

“Si el procedimiento de detención se había realizado visitando mis hombres el uniforme del Ejército, entonces no había más remedio que entregarlo (al detenido) a la justicia, para que en pocas horas saliera en libertad. Pero si la operación se realizaba con oficiales vestidos de civil y en coches ‘operativos’ como lo ordené tan pronto me di cuenta de lo que era la ‘justicia’ y la partidocracia, la cosa cambiaba (...) decidí separar en tres grupos a los guerrilleros del ERP según su importancia y peligrosidad, de modo tal que los más peligrosos e importantes nunca llegaran al penal. Entre estos últimos, y para evitar riesgos inútiles, muchos eran retenidos en Famailá, procediéndose a su interrogatorio hasta que no fueran de más utilidad.” (citado en Novaro y Palermo, 2003: 87)

En diciembre, el reemplazo del general Vilas por el general Antonio Bussi significó la intensificación de estas acciones y el tramo final del Operativo Independencia, con nuevos asesinatos ilegales de civiles, detenciones, centros clandestinos y enterramientos en fosas comunes. Después del golpe del 24 de marzo de 1976 Bussi fue nombrado gobernador²⁹⁸.

Mientras este proceso tenía lugar en Tucumán, a nivel nacional el peso de las Fuerzas Armadas también aumentaba. En septiembre de 1975 la presidente pidió licencia del cargo por razones de salud y asumió el Ejecutivo Ítalo Luder, a cargo del Senado, que estuvo en funciones entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre. Durante ese lapso, y a partir del ataque de Montoneros a un regimiento de Formosa, el Gobierno dictó decretos que autorizaban la acción de las Fuerzas Armadas y empleaban la palabra “aniquilamiento” respecto de las acciones de los grupos “subversivos”: los Decretos 2770/75, 2771/75 y 2772/75. Las presiones militares aumentaron, incluyendo el intento del Brigadier Capellini, el 18 de diciembre del mismo año, de desplazar a la presidente y adelantar los planes que se analizaban en forma reservada en las tres fuerzas. Frente a este hecho se hizo efectivo el relevamiento de autoridades en las Fuerzas Armadas y quedaron los jefes que estarían a cargo del golpe: Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

²⁹⁸ Ampliar en Taire (2008), hay algunos artículos que lo sintetizan. Entre ellos, Taire (2005).

En tanto, ante este avance del discurso represivo y la convocatoria abierta a la “lucha antisubversiva”, varias organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos como el Partido Intransigente, el Partido Comunista y el sector de Renovación y Cambio de la UCR comenzaron a reclamar de manera más insistente explicaciones gubernamentales por los hechos ilegales que se estaban produciendo: desaparición de personas, torturas y asesinatos en varios lugares del país²⁹⁹.

En tanto, el 6 de octubre de 1975 y cuando ocupaba provisionalmente la presidencia de la Nación, Ítalo Luder dictó varios decretos que aumentaban las facultades del Ejército, dividía el país en cinco zonas operativas y organizaba la intervención militar en todo el territorio nacional. Franco (2008) los enmarca en medidas que ya habían insinuado el plan desde 1973, y enumera la ilegalización del ERP (1973), las intervenciones provinciales, la ley de seguridad (1974 y el estado de sitio (1974).

Estos procedimientos marcan la declinación de las organizaciones guerrilleras, cuyo número preciso es aún difícil de determinar, si bien se sabe que habían sumado alrededor de 1500 miembros en ERP y 2000 en Montoneros. El 23 de diciembre de 1975 tuvo lugar el ataque del ERP al cuartel de Monte Chingolo, que finalizó con una derrota importante de la organización, con un centenar de bajas y una crisis interna posterior. Para diciembre de 1975 el Estado Mayor del Ejército consideraba que la guerrilla argentina había sido derrotada operativamente. Esto es confirmado por otras investigaciones (por ejemplo, Andersen 1993 y Gillespie, 1987), que refieren también la dificultad de sumar nuevos militantes para las organizaciones armadas. El diario Clarín informó que el 23 de julio de 1975 el general Mario Benjamín Menéndez informaba que la subversión estaba ya en plena retirada y que el 75 % de sus cúpulas había sido detenido o muerto. (Clarín 24 marzo 1996).

Paralelamente, la coordinación de acciones represivas entre los países del Cono Sur, conocido posteriormente como “Plan Cóndor”, ya se había puesto en marcha. El caso más importante había sucedido el 30 de septiembre de 1974. Ese día por la madrugada, una bomba acabó con la vida del ex jefe del Ejército Chileno, General Prats, y su esposa. Posteriormente, el ex agente de la policía secreta chilena, Michael Townley, confesó haber sido parte del hecho junto a otros militares de ese país³⁰⁰.

10. La hora de los sindicatos, las bases y los dirigentes

El movimiento obrero organizado resultaba un actor clave para la vuelta a la democracia. Si bien Perón había desplazado a muchos sindicalistas del papel de interlocutores privilegiados en función de las actitudes de los años precedentes, la llegada de Cámpora al Gobierno y la designación de Ricardo Otero, dirigente metalúrgico, como ministro de Trabajo, levantó muchas expectativas en los sectores obreros. La conducción de la CGT aceptó a regañadientes el pacto social que los llevaba a negociar salarios por montos menores a los reclamados y cerrar la posibilidad de negociaciones colectivas por dos años. Sin embargo, señala Torre (1983) que, para algunos dirigentes sindicales, aceptar estas condiciones significó volver a acercarse a Perón. Finalmente, luego de la ruptura del líder con los sectores juveniles, y mientras aumentaban los conflictos en las empresas, el acercamiento con el sindicalismo ortodoxo se profundizó.

Después de la muerte de Perón, la CGT renovó las presiones y, en tanto consolidaba internamente su poder, negociaba con el Gobierno apoyo a cambio de fortalecer sus espacios. En esa dirección se consiguió, en septiembre de 1974, la aprobación de la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo que regulaba la relación laboral en cuanto a jornada de trabajo, remuneración, licencias, suspensiones, extinción del contrato de trabajo, entre otras. Planteaba mayor consideración al trabajo de las mujeres y la maternidad, regulaba la jornada y el descanso anual, con vacaciones pagas y mayor estabilidad en el empleo.

Por otro lado, la intensa movilización de las bases fue en aumento, especialmente, en las seccionales del interior del país, pobladas de nuevos establecimientos industriales, donde se habían manifestado ya procesos de rebeldía interna y protesta social. Entre las diversas experiencias, las coordinadoras interfabriles surgieron como alternativa a la conducción de los sindicatos más fuertes de la estructura nacional, con amplia convocatoria y apoyo de vecinos en las localidades en las que se produjeron los principales conflictos. Esto se experimentó, por ejemplo, en la “huelga grande” llevada adelante por los trabajadores de Propulsora Siderúrgica (parte del Grupo Techint) entre mayo y septiembre de 1974. Esta coordinadora incluyó representantes de Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago, Petroquímica General Mosconi, Hospital de Gonnet, Frigorífico Swift (Berisso), metalúrgicos (SIAP y Kaiser Aluminio) y Corchoflex.

299 Se puede profundizar en Franco (2008).

300 Esta última información periodística se encuentra en diario Clarín, 12 de mayo de 2000, p. 32.

La situación más importante llevó al “Villazo” y el operativo represivo del Ejército, llamado “Serpiente colorada”. Se trató de una de las expresiones más visibles de la movilización popular de la época. El proceso tuvo su origen en el cordón industrial del sur santafesino, en especial en la empresa Acindar. Allí, las agrupaciones más combativas ganaron el cuerpo de delegados y la comisión interna desde una agrupación clandestina llamada Grupo Obrero del Acero (GODA). Con delegados de otras empresas metalúrgicas formaron la Lista marrón, que fue desconocida por UOM nacional. La seccional fue intervenida y se suspendieron los comicios de marzo de 1974. La reacción fue la huelga y la toma de fábricas, acompañadas por asambleas. Se sumaron otras plantas metalúrgicas de Villa Constitución, como Marathon y Metcon, y posteriormente, la ciudad entera paralizó sus actividades en apoyo a los trabajadores de Acindar. Este hecho fue conocido popularmente como “el Villazo”.

Después de esta instancia se abre un proceso de mediación y negociaciones, se habilitan las elecciones y se normaliza el cuerpo de delegados. Hacia fines de año asume formalmente la conducción Alberto Piccinini, con la derrota de la lista de las 62 organizaciones que estaba respaldada por la Conducción Nacional. Paulón (2013), protagonista y testigo de esas jornadas, retrata a los miembros de la comisión:

“El resto de la Comisión Directiva eran obreros comunes y corrientes, carentes de experiencia política, cansados de las permanentes intervenciones a la seccional por parte de la conducción nacional [...] Los primeros contactos fueron del propio Piccinini, Osvaldo Foresi, luego vinculado al PRT, Félix Delbó... el Gringo Porcu... Entre 1972 y 1974 se vinculan otros activistas y empiezan a marcar presencia tanto Poder Obrero como el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Al momento de las tomas de fábrica una nutrida vanguardia de medio centenar de sólidos activistas sostenían a la dirección que se animaba a enfrentar al aparato de la burocracia” (p. 84-85)

Este proceso marca la solidaridad de distintos sindicatos de base de todo el país y una articulación incipiente, expresada en abril de 1974 en el Plenario de la Democracia Sindical. De él participaron los dirigentes Alberto Piccinini (UOM Villa Constitución), Alberto Ferraresi (Sindicato de Farmacia - Peronismo de Base), René Salamancá (SMATA Córdoba y peronismo de base), Armando Jaime (CGT Clasista de Salta) y Agustín Tosco (Luz y Fuerza de Córdoba).

Los reclamos salariales fueron rechazados y se volvió a la huelga. El Gobierno habló de un complot subversivo y el 20 de marzo de 1975, caravanas de vehículos

policiales y militares avanzaron desde Rosario y Buenos Aires. Ocuparon la ciudad, allanaron casas y locales sindicales con listas de delegados provistas por la Empresa y detuvieron a los miembros de la comisión. Las líneas secundarias de delegados asumieron la resistencia y comenzaron una huelga de 59 días hasta que Acindar fue desalojada por las fuerzas del Gobierno y más de 100 obreros, detenidos. La resistencia entonces pasó a los barrios y se paralizó la actividad en toda la ciudad de Villa Constitución, con comisiones para resolver los problemas de abastecimiento, entre las que se destacó la Comisión de Mujeres del Villazo. Se sumaron otros sindicatos con huelgas como Unión Ferroviaria y La Fraternidad y aumentó la represión. Los testigos recuerdan la llegada de alrededor de 100 automóviles Ford Falcon de color verde, sin identificación y que llevaban a “fuerzas conjuntas”, compuestas principalmente por grupos especiales y miembros de la Tripla A.

El 22 de abril se hizo una marcha en el centro que congregó a unas diez mil personas (sobre una población que no llegaba a las 30.000). La represión fue dura y se denunciaron asesinatos y desapariciones. Considera Paulón (2013) que fue un punto de inflexión. La represión se fortaleció, la militarización de la zona limitó las acciones y los detenidos fueron enviados a unidades alejadas para cortar la relación con la protesta. El saldo de estas huelgas en el cordón industrial santafesino fue trágico: más de 30 asesinados, 300 detenidos y alrededor de 1000 trabajadores despedidos. La intervención en la empresa duró hasta diciembre de 1982.

Una de las particularidades de esta represión fue la utilización de personal no identificado, vehículos que no pertenecían a las fuerzas policiales ni militares y la instalación de un centro de detención y tortura en los dormitorios de solteros de la empresa Acindar. Las similitudes con procedimientos que aplicó la Dictadura posteriormente se completa con el hecho de que el presidente de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, fue nombrado Ministro de Economía.

Esta situación de represión de la movilización popular se desarrollaba en paralelo con las negociaciones frente al fracaso del modelo económico de ajuste implementado por el ministro Rodrigo y que llevó a la crisis a la que nos referimos en el punto 7.

La huelga de 48 horas coronó, de cierto modo, las protestas que trabajadores de todo el país estaban realizando y la contundencia de la medida - como se mencionó- forzó la renuncia de Rodrigo y de López Rega.

El Gobierno homologó los convenios que significaban aumentos salariales de hasta el 150% y, aunque la presidente no había sido cuestionada en los discursos de los dirigentes gremiales, quedó aún más debilitada. Las asociaciones empresarias aumentaron la presión, a través de un nuevo agrupamiento denominado APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales) y de medidas de lockout o “paros patronales”, como el paro ganadero y el paro empresario de febrero de 1976. Las declaraciones públicas ya eran un abierto enfrentamiento con el Gobierno.

El nombramiento de Antonio Cafiero en el ministerio de Economía y el pedido de licencia de la presidente permitieron un mayor peso de las organizaciones sindicales en el Gobierno pero enfrentadas a la paradoja de avalar políticas que perjudicaban a las bases en un contexto de alta movilización. Si bien las medidas de Cafiero eran graduales, no alcanzaron a contener la inflación, y la presión empresarial, con el retorno de la Presidente, llevó a que se lo reemplazara por un economista ortodoxo, Emilio Mondelli.

Cordone (2015) explica las posiciones de los gremios, que se dividían entre un “anti-verticalismo”, identificado con el metalúrgico y gobernador de Buenos Aires, Víctorio Calabró, y un “verticalismo” en aras de preservar al Gobierno, liderado por Lorenzo Miguel Torre (1983), por otro lado, considera que la negativa, por parte de los cuadros de la CGT, de apoyar a la presidente a través de una alternativa y mantenerse más como grupo de presión que como parte del Gobierno, aceleró el derrumbe en el que los mismos sindicalistas se vieron arrastrados.

El escenario del golpe ya había sido preparado por parte de distintos actores y el provicario castrense, Monseñor Bonamín, se preguntó si Dios “no querrá algo más de las Fuerzas Armadas”, para continuar: “debe alzarse lo que está tan caído y qué bueno es que sean los primeros en alzarse los militares... Que se pueda decir de ellos que una falange de gente honesta, pura, hasta ha llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país”³⁰¹.

301 Homilia pronunciada el 24 de septiembre de 1975, publicada en Revista Cuestionario (Noviembre 1975)